

Dña. Nadia María Calviño Santamaría.  
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital  
Paseo de la Castellana, 162.  
28046 Madrid

D. Roberto Martínez, presidente de la Asociación SFC-SQM Euskadi-AESEC, Asociación de Afectados por Enfermedades de Sensibilidad Central del País Vasco (Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomielitis Miálgica, Sensibilidad Química Múltiple, Fibromialgia y Sensibilidad Electromagnética o Electrohipersensibilidad), con CIF/NIF G95930905 y con domicilio social, a efectos de notificaciones en Barrio Errotaritxuena número 12-1°C, Durango-Vizcaya y código postal 48.200.

## **EXPONE:**

Que he leído el borrador de la Carta de Derechos Digitales presentado para consulta pública en la página:

[https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion\\_publica/audiencia/ficheros/SEDIACartaDerechosDigitales.pdf](https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/SEDIACartaDerechosDigitales.pdf)

Que, a pesar de no tener carácter normativo, sino solo descriptivo, prospectivo y prescriptivo, la presente Carta de Derechos Digitales dice reconocer como fuente de los mismos a la persona y su dignidad.

Que dentro del uso de las tecnologías digitales, una de las situaciones que necesitan ser descritas y tenidas en cuenta para una adecuada prospección y prescripción al respecto, es el de las personas que ven afectada su salud por el uso activo o pasivo de las mismas.

Que la dignidad de la persona no puede estar completa cuando su salud se ve afectada de manera innecesaria por una fuente de riesgo o daño que es conocida, evitable y, en último caso, precautoriamente regulable tal y como indica el Principio de Precaución.

Que la presente carta de Derechos Digitales no incluye ninguna mención, prevención o escenario de presentes ni futuras garantías relativas al derecho a la salud de los usuarios frente a las emisiones radioeléctricas de las infraestructuras y aparatos de este tipo de comunicaciones ya consideradas como uno de los tipos de contaminación más severos y prevalentes a nivel planetario: la “contaminación electromagnética”.

Que, sumados a la literatura científica, una treintena de llamamientos científicos internacionales han puesto sobre aviso y con alarma a gobiernos e instituciones de todo el mundo acerca del riesgo que entraña este tipo de contaminación para la salud de las personas y del medio ambiente.

Que, de ese modo, queda sin atender un relevante corpus de evidencia científica que pone de manifiesto los riesgos y daños asociados a este tipo de inmisiones radioeléctricas (daños al ADN, cáncer y *electrohipersensibilidad*, entre otros) y con ello se vulnera una adecuada caracterización del riesgo que estas tecnologías entrañan para el medio ambiente, para la salud pública, la protección de la salud de los usuarios de tecnologías digitales, su representación dentro de este colectivo de usuarios y con ello su dignidad.

Que aunque el derecho a la protección de la salud no figura en nuestra Constitución como derecho fundamental, en la coyuntura actual se hace cada vez más evidente que el mismo debería ser incorporado como tal en la próxima revisión que se haga de nuestra Constitución.

Que el derecho al uso de las tecnologías digitales no es ni debe ser incompatible con el derecho a la salud.

Que las inmisiones electromagnéticas que generan las telecomunicaciones vulneran no sólo el derecho a la salud de los usuarios sino también el derecho a la integridad personal y a la inviolabilidad del domicilio considerados, tanto el cuerpo como el domicilio, espacio público radioeléctrico.

Que estas mismas consideraciones y la recomendación de regular este tipo de inmisiones, así como la de proteger la salud de los ciudadanos, especialmente la de los grupos sociales vulnerables (niños, enfermos, mujeres embarazadas y *electrohipersensibles*, entre otros) todos ellos usuarios digitales, que como tales deben verse reconocidos en la presente Carta de Derechos, han sido recogidas en los siguientes textos y resoluciones:

- La Resolución 1815 de 27 de mayo de 2011 del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, acordó entre otros puntos recomendar:

*8.1.1. Adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, y en especial la exposición de los/as niño/as y jóvenes que al parecer corren el mayor riesgo de tumores de la cabeza;*

*8.1.3. Poner en práctica campañas de información y sensibilización sobre los riesgos de los efectos biológicos potencialmente nocivos a largo plazo para el medio ambiente y para la salud humana, especialmente dirigidas a los/as niños/as, adolescentes y jóvenes en edad reproductiva;*

*8.1.4. Prestar especial atención a las personas "electrosensibles" afectadas por un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos, y establecer medidas especiales para protegerlas, incluida la creación de "zonas blancas" no cubiertas por las redes inalámbricas;*

*8.2.1. Establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo plazo a las microondas en todas las zonas interiores, de conformidad con el Principio de Precaución, que no superen 0,6 voltios por metro, y a medio plazo reducirlo a 0, 2 voltios por metro. (Este umbral es equivalente a 0,1µW/cm<sup>2</sup>, 4.500 veces menor, y para medio plazo 45.000 veces menor que los permitidos en el Estado español en base a la Recomendación del Consejo de Europa antes citada.)*

*8.2.2. Llevar a cabo todos los procedimientos necesarios de evaluación de riesgos para todo tipo de dispositivo nuevo antes de autorizar su comercialización.*

*8.2.3. Introducir un sistema de etiquetado claro que indique la presencia de microondas o campos electromagnéticos, la potencia de transmisión o la tasa de absorción específica" (TAS, DAS o SAR) del dispositivo y cualquier riesgo para la salud relacionado con su uso;*

- El Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, que fue aprobado para trasponer la Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, prevé en su artículo 4 que "Los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas para el control del riesgo en su origen".

Por todo lo anterior **SE SOLICITA** la inclusión en la Carta del derecho de las personas a estar protegidas frente a las emisiones electromagnéticas:

- **Teniendo en cuenta que la mayoría de los dispositivos y sistemas que sustentan el "mundo digital" emiten radiofrecuencias, una verdadera carta de derechos digitales tiene que incluir los derechos de quienes se ven expuestos a las emisiones de radiofrecuencia, y muy especialmente los de los que se ven expuestos de forma pasiva con efectos negativos en su salud.**

- **El acceso al mundo digital ha de estar garantizado para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad ambiental de electrosensibilidad. Debe ser un acceso que no ponga en riesgo su salud ni la de otros grupos vulnerables.**
- **Para el acceso a los entornos digitales los poderes públicos deben promover una tecnología biocompatible**, que no entrañe riesgos para la salud, con el objeto de proteger especialmente a los grupos vulnerables como: personas electrosensibles, enfermos crónicos, niños, mujeres embarazadas y personas de edad avanzada.
- **Garantizar la igualdad y accesibilidad a los entornos digitales a las personas con discapacidad ambiental** como la electrohipersensibilidad implica garantizar una tecnología de acceso libre de radiofrecuencias (cableada). E incluso facilitar la accesibilidad de estas personas a la sociedad en la actualidad, conlleva primar **sistemas tecnológicos de acceso vía cable**, contrariamente a lo que está sucediendo. Las personas electrosensibles necesitan dispositivos y sistemas libres de radiofrecuencia así como entornos libres de radiofrecuencia, para que tanto el mundo real como el digital les sea accesible.
- **En su deber de promoción de la salud, los poderes públicos deberán** promover políticas de uso responsable de los dispositivos radiantes (por los que se accede a los entornos digitales) que contemplen los riesgos para la salud a largo plazo de la exposición a estas radiaciones.
- **En relación al compromiso con las generaciones futuras y en aras a garantizar la protección del interés superior del menor, el uso responsable de los dispositivos** debería contemplar su derecho a la salud garantizando su adecuado desarrollo integral (no solo de su personalidad), minimizando los riesgos para su salud de exposiciones crónicas por los efectos no térmicos a largo plazo.